

C.A. de Santiago

Santiago, once de enero de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE:

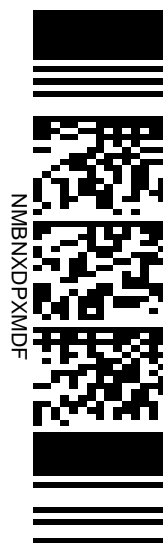
I.- EN CUANTO A LA APELACIÓN FORMULADA POR LA DEMANDANTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 05/03/21, QUE AMPLIÓ EL TÉRMINO PARA CONTESTAR LA DEMANDA:

Que conforme estatuye el inciso final del artículo 5° de la Ley 19.260, “*En estos juicios y en aquellos casos en que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, proceda la pluralidad de demandantes, el plazo para contestar la demanda se aumentará en tres días por cada demandante, con un límite máximo de noventa días...*”.

Pues bien, siendo originalmente 67 demandantes, los que posteriormente, según se dijo ante estrados, se redujeron a 64 por haber renunciado 3 de ellos a sus derechos, de haberse aplicado el aumento de tres días por cada actor, debió al menos extenderse el término para contestar la demanda en 192 días, pero existiendo un plazo máximo legal que autoriza este aumento a sólo 90 días, cualquiera sea el número de los demandantes, evidentemente resolvió bien el juez a quo al conceder a la entidad demandada una ampliación de tiempo para contestar el libelo pretensor, precisamente por noventa días, hasta el 12 de junio de 2021;

II.- EN CUANTO A LA APELACIÓN FORMULADA POR LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE 15/10/21, QUE RECIBIÓ LA CAUSA A PRUEBA:

Que esta Corte aprecia suficiente y correctamente establecidos los hechos substanciales, pertinentes y controvertidos de la etapa de discusión, motivo por el cual se desestimaré la impugnación en análisis.

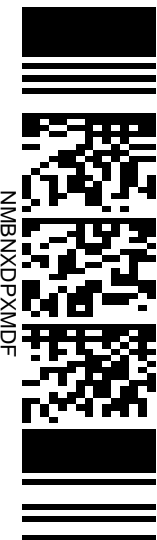


III.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA INTERPUESTO POR LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA:

PRIMERO: Que como causal de casación en la forma en la que se sustenta el presente arbitrio, el recurrente invoca el numeral 5° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, “*en haber sido pronunciada -la sentencia- con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170*”, en relación con el numeral 4° de dicho precepto, esto es, por haber prescindido la juez a quo señalar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento al fallo.

Afirma, en síntesis, que la sentencia fue pronunciada careciendo del aludido requisito dado que su parte alegó litis consorcio pasiva necesaria, toda vez que según los propios demandantes el conflicto tendría su origen en distintos pronunciamientos de la Superintendencia de Pensiones, la que no fue demandada en estos autos; que los precedentes jurisprudenciales previos no son vinculantes en nuestro sistema jurídico como sí sucede en los que pertenecen al Common Law; que la acción intentada no posee la naturaleza de mera certeza, existiendo al efecto la acción prevista en el artículo 5 de la Ley 19.260; y que se alegaron también las excepciones de caducidad, prescripción y cosa juzgada, respecto esta última de los actores Vallejos, Mora y González, defensas todas que no fueron debidamente abordadas en el fallo impugnado.

Agrega a lo dicho, en resumen, que de su sola lectura es posible advertir “...*que no contiene un mínimo desarrollo, apreciación y ponderación de las probanzas rendidas en autos, por lo que no puede entenderse cumplida la exigencia del referido numeral, esto es contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia*”;



SEGUNDO: Que el aludido recurso de casación en la forma deberá ineludiblemente ser desechado, toda vez que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, el tribunal podrá desestimar el presente arbitrio si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo o cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo del mismo. La primera hipótesis en referencia es precisamente la del caso que nos ocupa, en que el recurrente, junto con la casación en la forma, ha interpuesto también apelación, por lo que al resolverse este último recurso que se sustenta sobre similares argumentos a aquellos que fundan la impugnación de nulidad, el denunciado vicio formal de ser efectivo podrá ser subsanado, lo que determina concluir que la infracción que se acusa no es de aquellas remediabiles únicamente con la invalidación del fallo, motivo bastante para desestimar el recurso de casación interpuesto.

IV.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN DEDUCIDO POR LA PARTE DEMANDADA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA:

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de sus considerandos Quinto al Décimo Tercero.

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS PRESENTE:

TERCERO: Que en primer lugar, efectivamente concurre en la especie la excepción de litis consorcio pasivo necesaria, dado que como se advierte del contenido del libelo pretensor el conflicto sub lite se originaría según los propios dichos de los demandantes, en razón de una “*errada interpretación*” que habría efectuado la Superintendencia de Pensiones “*en ejercicio de sus atribuciones contempladas en el artículo 47 N°7 de la Ley 20.255*”, en virtud de la cual habría



dictaminado “*que los ex trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, pensionados por accidentes en actos de servicio, regidos por el D.S. N° 2259 de 1931, se encuentran afectos al artículo 86 del D.L. 3.500 de 1980, esto es, que deben jubilar por vejez una vez cumplida la edad legal, dejando de percibir la pensión por invalidez contemplada en el señalado D.S. 2.259*”.

Luego, resulta indudable que tratándose de un organismo público, el Instituto de Previsión Social no ha podido sino ajustar su actuar a lo dictaminado por el referido ente contralor, quien de éste modo, siendo reconocidamente el autor de la interpretación legal que se ha pretendido tachar como errónea en el presente juicio, debió ser también demandado en autos, reflexión que conlleva concluir que la relación procesal del litigio de autos se constituyó irregularmente al no haberse dirigido la demanda contra todos los sujetos pasivos que obligatoriamente debieron ser demandados;

CUARTO: Que enseguida, ciertamente debe señalarse, además, que la acción intentada en autos no posee la naturaleza de una de mera certeza, puesto que se formuló en contra del Instituto de Previsión Social y producto de la declaración que se reclama efectuar al órgano jurisdiccional, de acogerse la misma, devendrán efectos patrimoniales en contra de dicha entidad pública.

En efecto, lo solicitado al tribunal no se limita a que se efectúe una declaración nimia acerca de la correcta interpretación del derecho para resolver un estado de incertidumbre, proyectándolo sobre una controversia actual, sino que lo que se pretende a través de la acción sub lite es modificar una situación jurídica ya establecida;

QUINTO: Que son hechos relevantes para resolver las demás excepciones opuestas a la demanda y el fondo de la controversia sub lite, los siguientes:

a).- Todos los demandantes son ex trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles, que fueron contratados antes del 3 de octubre de 1992, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Ley 19.170 y con



antelación, también, al 29 de agosto de 1987, fecha de publicación de la Ley 18.646.

b).- Todos los actores accedieron voluntariamente al sistema previsional del D.L. 3.500 de 1980, por lo que se encuentran afiliados a una AFP.

c).- Con posterioridad a lo anteriormente explicitado se pensionaron en razón de lo dispuesto en el D.S. 2.259, entre los años 1991 y 2012, fechas en que estaba vigente la modificación introducida por la Ley 18.646 al D.L. 3.500.

d).- Al momento de interposición de la demanda, respecto de 8 demandantes había cesado la pensión de invalidez;

SEXTO: Que como se sabe el artículo 4 de la Ley 19.260, en lo pertinente estatuye: “*En los regímenes de previsión social fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social, el derecho a las pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivencia, y a las de jubilación por cualquier causa, será imprescriptible.*”

En todo caso, la mensualidades correspondientes a las pensiones de invalidez, vejez, sobrevivencia, de jubilación por cualquier causa, y a los demás beneficios de seguridad social que emanen o se relacionen con el respectivo régimen de pensiones, tales como bonificaciones, o rebajas de cotizaciones o aportes por permanencia en servicios, que no se soliciten dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que ocurriere el hecho causante del beneficio, sólo se pagarán desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Igual norma se aplicará en los casos de reajustes, acrecimiento, aumento o modificación de dichos beneficios.

Los referidos beneficios son revisables de oficio o a petición de parte en los casos en que se comprobaren diferencias en la computación de períodos de afiliación o servicios, en las remuneraciones imponibles consideradas para la determinación del sueldo base de pensión, o, en general, cuando existiere cualquier error



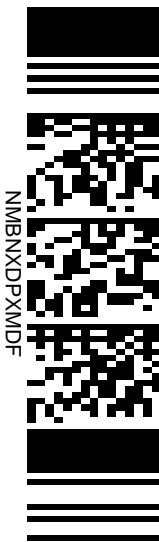
de cálculo o de hecho en la liquidación. Son, asimismo, revisables cuando se hubiere cometido algún error en la aplicación de las leyes o cualquiera otro error de derecho. Igual revisión y por las mismas causas, procederá respecto de los reajustes legales que experimente el beneficio.

*La revisión a que se refiere el inciso anterior **solamente podrá efectuarse dentro del plazo de tres años contado desde el otorgamiento del beneficio o del respectivo reajuste...***

Pues bien, conforme al claro tenor de la norma resulta efectivo que la acción que pretende la revisión de los beneficios previsionales de los actores se encuentra caduca, dado que el plazo de tres años -que es un término de caducidad y no de prescripción y que, por tanto, no admite suspensión ni interrupción-, se cuenta desde la fecha de otorgamiento del beneficio y conforme al mérito de los antecedentes de cada uno de los actores, el mismo considerado individualmente respecto de ellos, transcurrió en exceso a la fecha de notificación de la demanda;

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo concluido precedentemente, deberá también acogerse la excepción de cosa juzgada impetrada respecto de los actores Marco Antonio Vallejos Mardones, Luis Alejandro Mora Zapata y Roberto Alfonso González Molina, pues revisada la sentencia recaída en los autos rol N° C-25.258-2014, seguidos ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, resulta evidente que concurre en lo que a ellos atañe la triple identidad que prevé el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por existir identidad de partes, de causa y de objeto de pedir;

OCTAVO: Que no obstante todo lo razonado precedentemente, en lo que respecta al fondo del asunto debatido, se dirá que hasta 1987 el “Nuevo Sistema de Pensiones” contemplaba que aquellos trabajadores beneficiados con una pensión de invalidez total de la Ley 16.744 debían efectuar las cotizaciones de los artículos 17 y 85, previsional y de salud, explicitando que al cumplir la edad legal de



jubilación dicha pensión cesaba y el trabajador debía pensionarse por vejez conforme al D.L. 3.500.

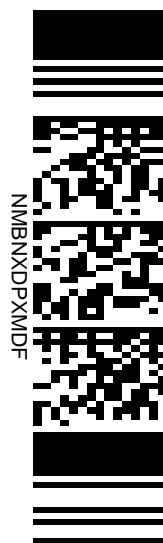
A partir de la Ley 18.646, de 29 de agosto de 1987, ello se hizo extensivo a todo otro cuerpo legal que contemple la protección contra riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, como es el caso del D.S. 2.559 y es por ello, entonces, que a partir de esta última fecha los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles, al pensionarse al amparo del aludido D.S. 2.559, igualmente efectuaban sus cotizaciones individuales obligatorias y debían pensionarse por vejez al cumplir la edad legal de jubilación.

Todos los demandantes de autos se pensionaron por invalidez con posterioridad al 29 de agosto de 1987 y al obtener esta pensión, ella se encontraba sujeta a los descuentos previsionales y de salud, de manera acotada en el tiempo, conforme estatuye el artículo 86 del D.L. 3.500, hasta la llegada de la edad legal de jubilación de cada uno de ellos, por lo que mal pudieron incorporar a la regulación que se les aplicó en el momento en que obtuvieron su pensión de invalidez, las particularidades de la normativa anterior, no vigente a esa época.

Si bien los demandantes obtuvieron una pensión de invalidez al amparo del D.S. 2.559, evidentemente sus beneficios quedaron sujetos a la regulación vigente al momento en que el beneficio se hizo efectivo, dado que en ese instante la obligación se hizo exigible y el trabajador se hizo acreedor de su pensión, momento recién desde el cual puede hablarse de un derecho adquirido y no de una mera expectativa;

NOVENO: Que el principio de la norma más favorable no resulta aplicable en el caso sub lite, por tratarse de una regla circunscrita a regir en el ámbito de las disposiciones de naturaleza laboral y no previsional, como es la del asunto que nos ocupa, respecto de las cuales existen principios técnicos específicos y propios de la materia de la seguridad social.

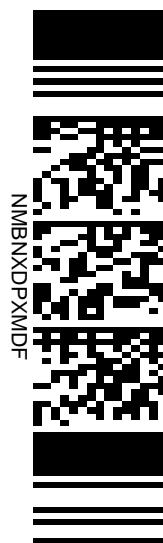
Por lo demás, de entenderse lo contrario en orden a que sí sería extensible este principio a los temas previsionales, no es posible olvidar



que dicha máxima supone la existencia de dos normas positivas al mismo tiempo, las que teniendo distinta jerarquía, aquella de menor rango resulta más favorable a los intereses del trabajador, hipótesis que en este caso tampoco concurre, puesto que el carácter de pensión vitalicia que tuvo la pensión de invalidez del D.S. 2.559, previo a la modificación que le introdujo la Ley 18.646, el 29 de agosto de 1987, fue sustituido por el actual texto del artículo 86 del D.L. 3.500, vigente a la época en que los actores se pensionaron de invalidez y “adquirieron el derecho” a recibir su respectiva pensión por tal concepto;

DÉCIMO: Que en el mismo sentido que se viene razonando, el Dictamen N° 49.496/2006, de la Superintendencia de Seguridad Social, sostiene que la Ley 18.646, de 29 de agosto de 1987, uniformó el tratamiento del régimen de pensiones por invalidez dentro del Nuevo Sistema de Pensiones, lo que significó que los trabajadores pensionados por invalidez al mismo, debían por una parte, efectuar las imposiciones previstas en los artículos 17 y 85 del D.L. 3.500 y, por otra, que al cumplir la edad legal de jubilación -60 años las mujeres y 65 años los hombres-, cesaban en el goce de la pensión de invalidez profesional para pensionarse por vejez, incluyéndose por tanto al nuevo sistema las pensiones derivadas del D.S. 2.259;

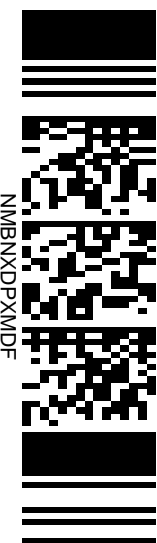
UNDÉCIMO: Que lo concluido precedentemente es concordante con lo que prevé el inciso primero del artículo 53 de la Ley 16.744, desde el 1 de febrero de 1968, el cual estatuye el principio de “continuidad de pensiones”, en este caso, de la de vejez, que una vez constituida reemplaza a la pensión de invalidez, en los siguientes términos: *“El pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional que cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente régimen previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las normas generales pertinentes, dejando de percibir la pensión de que disfrutaba”;*



DUODÉCIMO: Que en definitiva y compartiendo íntegramente el voto discordante del fallo de la Excma. Corte Suprema rol N° 20.887-19, de fecha 20 de agosto de 2020, esta Corte no puede dejar de hacer suya también la aprehensión de las disidentes en el sentido de relevar que de permitir que se continúe percibiendo por los demandantes la pensión de invalidez de manera vitalicia, que se distribuye conforme a un sistema de reparto, la que recibirán de manera paralela a aquella que se les otorgará conforme al sistema de pensiones del D.L. 3.500, por las AFP a que se encuentren afiliados o por la respectiva compañía de seguros, de cargo a los fondos que hayan acumulado en su respectiva cuenta de capitalización, se generará para ellos un beneficio que no encuentra justificación alguna y que configura un enriquecimiento sin causa, inadmisibles en nuestro ordenamiento jurídico;

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, en relación a la petición subsidiaria que efectúa la demanda “*para el improbable caso que se establezca que las normas del D.L. 3.500 son aplicables a los ex trabajadores de la Empresa Ferrocarriles del Estado*”, en orden a que se declare que sin perjuicio de ello corresponde aplicarles supletoriamente la Ley 16.744, en el sentido de que las pensiones de vejez que reciban no podrán ser inferiores a las que disfrutaban, ni al 80% del sueldo base que sirvió para calcular la respectiva pensión, se dirá únicamente que este último cuerpo legal no les resulta de modo alguno aplicable, toda vez que dichos trabajadores obtuvieron su pensión como beneficiarios del D.S. 2.259 y del D.L. 3.500, no de la Ley 16.744, sin que además en la normativa que regula su sistema de pensiones se advierta algún vacío que autorice la aplicación supletoria del mencionado texto legal.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y atendido además lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, 764, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se declara:



I.- Que se confirma la resolución apelada de fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en los autos rol N° C-1.546-21, seguidos ante el 28° Juzgado Civil de Santiago.

II.- Que se confirma, también, la sentencia interlocutoria apelada de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, pronunciada en el mismo proceso.

III.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma deducido en la petición principal de la presentación de veintiuno de abril de dos mil veintidós.

II.- Que se revoca la sentencia definitiva apelada, dictada en los autos previamente individualizados, de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós; y en su lugar se declara:

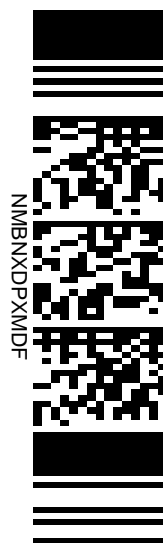
a).- Que **se acogen** las excepciones de litis consorcio pasivo necesaria, de caducidad y de cosa juzgada opuestas por la demandada.

b).- Que **se rechaza íntegramente** la demanda de autos, sin costas, por haber tenido los demandantes motivo plausible para litigar, por existir opiniones jurisprudenciales que sirvieron de apoyo a su pretensión.

Redacción de la Ministro Sra. Villadangos.

Regístrese y devuélvase la competencia.

N°Civil-2199-2021.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Maritza Elena Villadangos F., Ministra Suplente Karina Irene Ormeño S. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, once de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a once de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

